



Referencia:	2022/00005122A
Procedimiento:	Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno
Asunto:	Certificado Punto 7º aprobado en el Pleno Ordinario celebrado el 24 de febrero de 2022
Secretaría General	

D^a ROCÍO CRISTINA GARCÍA APARICIO, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA (MÁLAGA).

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2022 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en su parte dispositiva:

Contestación del escrito de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Expediente de alteración de la línea divisoria que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola. (Expte. 2020/0036929F)

Dado cuenta por el Secretario del Dictamen que se transcribe de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 17 de febrero de 2022.

“EXP. NUM. 2020/0036929F

CONTESTACIÓN ESCRITO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE LÍNEA DIVISORIA QUE DELIMITA LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BENALMÁDENA Y FUENGIROLA.

Por el Secretario, se da cuenta del expediente así como del escrito de Administración Local y de los informes que se han emitido al respecto, de los que se da lectura a los siguientes:

Informe del Arquitecto Municipal, de fecha 11/02/22:

“En relación con el expediente sobre la tramitación del procedimiento de alteración territorial del municipio incoado por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía (Expte. 1/2021), por esta Sección de Planeamiento se informa:

1. ANTECEDENTES:

- Mediante Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020 (publicado en el BOJA de 27 de octubre de 2020), se establecen, a través de actuaciones de replanteo ejecutadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola, ambos en la provincia de Málaga.



Resultado del informe del citado Instituto de Cartografía, queda constancia la plena validez del acta de deslinde, con línea divisoria definitiva e inamovible, entre los municipios de Benalmádena y Fuengirola practicada el 24 de septiembre de 1874.

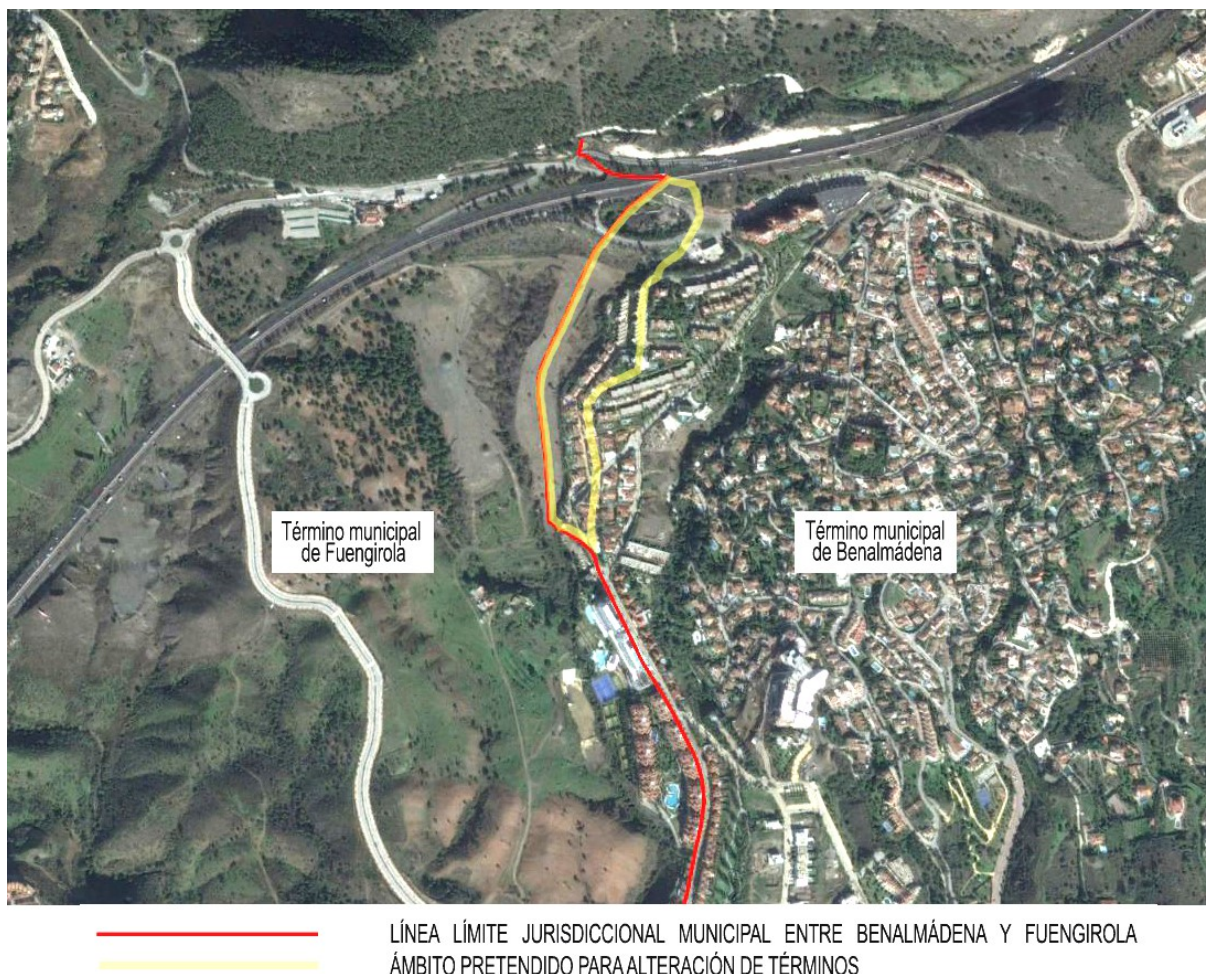
- Con fecha del 09 noviembre 2021 la Dirección General de Administración Local pone en conocimiento al Ayuntamiento de Benalmádena, como condición de municipio interesado, la incoación del procedimiento de alteración de términos municipales, en virtud del artículo 95 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, por parte del municipio de Fuengirola respecto a una zona colindante muy concreta del término municipal de Benalmádena.

2. ANÁLISIS TÉCNICO:

Tras el estudio de la documentación técnica relativa al expediente de alteración de los términos municipales de Fuengirola y Benalmádena, se deduce lo siguiente:

Si bien es cierto que, tal y como se expone en la memoria justificativa, el municipio de Fuengirola ha venido erróneamente rigiendo y administrando territorios que no eran de su competencia, en lo que respecta al planeamiento urbanístico, esto no se considera motivación suficiente para la alteración de los límites entre los términos municipales, pues dicho acto niega uno de los principales objetivos del desarrollo urbano sostenible, que defiende que este deberá ser colindante al suelo urbano del núcleo de población existente, condición que ni se ha dado ni se da entre el municipio de Fuengirola y el ámbito que pretenden segregar del término de Benalmádena, pues esto supondría la localización de una zona completamente aislada de su núcleo urbano a través de una extensa porción de terreno sin urbanizar.

Por el contrario, como se puede comprobar en las imágenes, dicha condición de desarrollo urbano sostenible se encuentra más que justificada en el término municipal de Benalmádena, pues el ámbito pretendido para la alteración de términos está plenamente integrado con el entramado urbano de este municipio.



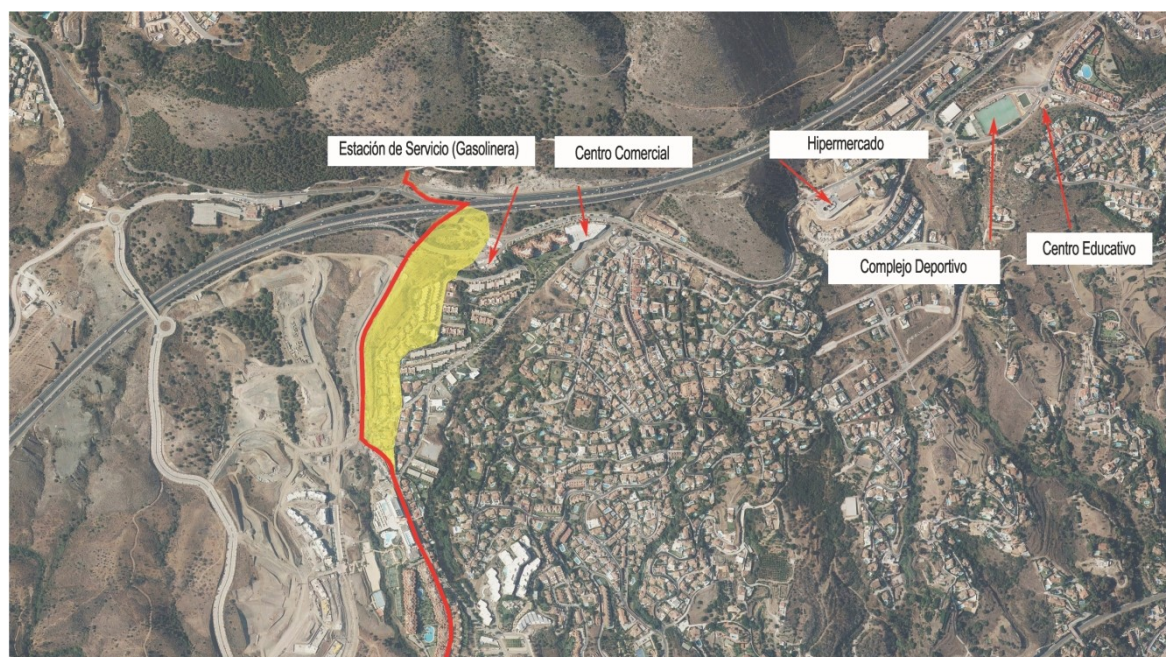
Es tal la consolidación que tiene este ámbito controvertido con la malla urbana de Benalmádena, que existen servicios e infraestructuras que este municipio viene prestando al mismo. Ejemplo de ello es la red de tráfico rodado que sirve a la zona debatida, ya que a esta sólo es posible acceder desde Benalmádena mediante viales que conectan con Avd. del Higuierón, en servicio desde hace más de veinte años, lo que garantiza la comunicación con el resto de infraestructuras y dotaciones del municipio.

Por otro lado, como se puede apreciar en el siguiente plano facilitado por la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena, EMABESA, el servicio de abastecimiento de agua potable en el citado ámbito se encuentra dentro del límite (marcado en color rojo) del área de cobertura de la empresa pública municipal de este Ayuntamiento.



Es importante comentar que la ordenación urbanística debe conseguir un desarrollo cohesionado del municipio en términos sociales, culturales, económicos, sanitarios y ambientales; garantizando la adecuada dotación de servicios, espacios y equipamientos públicos con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población.

En base a lo anterior, debe señalarse los numerosos equipamientos públicos y privados que dotan desde el municipio de Benalmádena al ámbito en cuestión en una ratio no superior a 2 kilómetros, tales como centros educativos o deportivos, áreas comerciales, farmacias, hipermercados, estación de servicios, etc. Cuestión no menos baladí, ya que cualquier vecino de la zona que quisiera servirse de las dotaciones del municipio de Fuengirola tendría que desplazarse un mínimo de siete kilómetros a través de la Autovía del Mediterráneo.



Ámbito pretendido para alteración de términos

SERVICIOS MÁS CERCANOS A LA ZONA DE ÁMBITO

Por último, cabe mencionar el informe emitido el 13 de julio de 2021 por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el que se aclara que:

“La modificación del término municipal no supone la pérdida de vigencia o eficacia de los instrumentos de ordenación urbanística que se ven afectados por tal modificación, tampoco es causa de nulidad de los mismos; al contrario, como hemos dicho antes, siguen plenamente eficaces hasta que sean modificados, revisados, o, en su caso, anulados o sustituidos. Significa esto que en el espacio controvertido, ahora delimitado como parte del término municipal de Benalmádena, sigue vigente el PGOU de Fuengirola hasta tanto, en lo que se refiere a este espacio, sea modificado, anulado o sustituido a iniciativa del municipio que ahora ostenta la competencia territorial sobre el mismo - Benalmádena-.”

Por tanto, los vecinos pertenecientes al ámbito objeto no ven alterado lo más mínimo sus derechos y deberes sobre la propiedad de suelo.

3. CONCLUSIÓN:

En base a lo anterior, esta Sección de Planeamiento muestra la absoluta disconformidad respecto a la alteración de los términos municipales planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, considerando la falta de motivación de dicho acto según lo expuesto en el presente informe.”

Informe de la Vicesecretaría de fecha 14/02/2022

“En cumplimiento del deber atribuido por el art. 3.3 del RD 128/2018 de 16 de marzo se emite el siguiente en relación al expediente instruido por el Ayuntamiento de Fuengirola para alterar los límites de su territorio colindante con el municipio de Benalmádena.



ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Informe jurídico de 13 de julio de 2021 de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio señalando en el mismo que “..... el Ayuntamiento ejerce sus competencias en el territorio que constituye su término municipal artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)- siendo los elementos del municipio el territorio, la población y la organización -artículo 11.2 LBRL-. La delimitación del territorio de los municipios de Fuengirola y Benalmádena, realizada mediante actuaciones de replanteo, en virtud de la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020, supone la fijación del territorio de cada uno de estos municipios en el límite que comparten. La delimitación realizada surte efectos desde la fecha de publicación de la Orden (27 de octubre de 2020); a partir de esta fecha, pues, la competencia territorial para el ejercicio de cualquier atribución o competencia municipal, incluidas las de contenido urbanístico, se atribuirá al municipio al que le haya correspondido el territorio sobre el que recae. Por tanto, cada municipio ejerce las competencias urbanísticas, sin ningún tipo de limitación o reserva, sobre el territorio que le corresponde tras la delimitación, desde la fecha de publicación de la Orden...”

2.- Orden de 15 de octubre de 2020 en la que se determina , entre otros aspectos los siguientes “Por ello , partiendo de la consideración de que , según dispone el art. 2.2 k) del Decreto 157/2016 , de 4 de octubre , el acta de deslinde constituye el título acreditativo del deslinde entre dos municipios , la presente orden se ha limitado a proyectar sobre la realidad física la línea definitiva divisoria de los municipios de Benalmádena y Fuengirola , a partir de la descripción contenida en el Acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874 y con pleno respeto de la misma , conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 expresando sus coordenadas en grados sexagesimales , con precisión mínima de cinco decimales y en proyección UTM huso 30 para la representación cartográfica.

En dicha orden se recoge que teniendo en cuenta que el mapa topográfico deriva de los deslindes efectuados y que estos, una vez consentidos , cualquiera que sea su fecha, son firmes e inamovibles , habiendo transcurrido mas de un siglo desde las referidas actuaciones , la Comunidad Autónoma de Andalucía impulsó desde el año 2007, al amparo de sus competencias, el replanteo sobre el terreno de las líneas límites descritas en las actas de deslinde , con la finalidad de dotarlas de coordenadas precisas en el Sistema Geodésico de Referencia actual (ETRS89). En definitiva, estas actuaciones posteriores tienen como objeto trasladar a la realidad geográfica actual el trazado de la línea entre mojones acordada en su día por los representantes de los ayuntamientos afectados, habida cuenta de las variaciones físicas que se han venido produciendo en el territorio.

Merece subrayarse el elevadísimo grado de objetividad y concreción en la referenciación geográfica que permiten las modernas técnicas cartográficas utilizadas por el instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía , en cuyo informe de replanteo de la línea que nos ocupa , realizado a requerimiento del órgano instructor , se evidencia su rigor y profesionalidad en su trabajo, desarrollado al amparo de las instrucciones técnicas a las que han de ajustarse los informes de deslinde y replanteo de los términos municipales , publicadas en el BOJA de 17 de abril de 2017.

Ante la alegación del Ayuntamiento de Fuengirola de los sucesivos planeamientos aprobados sin oposición del Ayuntamiento de Benalmádena , se señala que no se puede estimar la alegación, en tanto que a la diferencia observada entre los datos identificativos de la propuesta de la línea límite con respecto al planeamiento urbanístico , es necesario traer a colación el dictamen 478/2009, de 15 de julio , emitido por el Consejo Consultivo



de Andalucía en respuesta a una consulta facultativa que le fue remitida por el entonces Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio , con objeto de disponer de argumentaciones jurídicas , para solventar , en el ámbito competencial de su Consejería , la problemática surgida en aquellos supuestos en los que se advertían discordancias entre el deslinde oficial del término municipal y los límites del suelo clasificado por el planeamiento urbanístico . Tal dictamen se pronuncia en el sentido de que una integración sistemática de la legislación andaluza sobre ordenación del territorio , demarcación municipal y ordenación urbanística , deja pocas dudas sobre la posición jerárquica prevalente de la ordenación territorial sobre la urbanística , de forma que el instrumento por excelencia de ordenación urbanística , esto es , el PGOU, se ha de acomodar necesariamente al Plan de Ordenación del Territorio , si existiere , o a la figura de ordenación territorial o con incidencia sobre el territorio adoptada. Afirma también el mencionado dictamen que la subordinación del planeamiento general al lindero oficial del término municipal no solamente viene impuesta por ser el municipio el sustrato físico sobre el que se ejercen las competencias municipales , más aun las urbanísticas , sino también por la dependencia o subordinación en la que, respecto a la ordenación del territorio , se encuentra la ordenación urbanística y que, alterando un término municipal por el procedimiento establecido en la normativa de aplicación , el paso siguiente debe ser, la adaptación del planeamiento general a dicha nueva demarcación territorial . Pero no a la inversa, es decir, el PGOU no puede, por sí mismo, el término municipal ya delimitado.

En suma, que al constituir la demarcación municipal una actuación con incidencia en la ordenación del territorio, la ordenación urbanística está subordinada a dicha ordenación del territorio, de suerte que el Plan General no puede, en ningún caso, alterar el término municipal, sino que el planeamiento general estaría subordinado al lindero oficial del término municipal.

En este sentido, según lo expresado en el Acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874 y al amparo de lo previsto en el art. 2.2 b) del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, la línea límite entre Benalmádena y Fuengirola tiene el carácter de línea definitiva.

En relación a la alegación sobre la línea delimitadora en función de lo establecido por el Catastro, se señala en la Orden que no puede aceptarse dicha alegación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado, de manera reiterada, que la diferencia entre los deslindes realizados a efectos de delimitación de términos municipales y las actuaciones llevadas a cabo a los efectos puramente catastrales, estriba en que estas últimas no participan de la naturaleza propia de los deslindes jurisdiccionales de municipios. Para dicha delimitación carece de virtualidad el Catastro, puesto que la misma ha de realizarse mediante un procedimiento de deslinde.

3.- Escrito de 10 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Administración Local otorgando audiencia al Ayuntamiento de Benalmádena ante el procedimiento de alteración territorial iniciado por el Ayuntamiento de Fuengirola. En dicho escrito se pone de manifiesto que al amparo del art. 13 del Decreto 157/2016 a partir del 27 de agosto de 2021 comienza a computarse el plazo de 18 meses para resolver y notificar este procedimiento. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, se concede un plazo de audiencia de 4 meses desde la notificación del oficio, con objeto de que mediante acuerdo plenario adoptado por mayoría absoluta puedan pronunciarse al respecto o aportar documentación que estimen conveniente.

4.- Informe del Arquitecto municipal de fecha de 11 de febrero de 2022 en el que se determina que “tras el estudio de la documentación técnica relativa al expediente de



alteración de los términos municipales de Fuengirola y Benalmádena, se deduce lo siguiente:

Si bien es cierto que, tal y como se expone en la memoria justificativa, el municipio de Fuengirola ha venido erróneamente rigiendo y administrando territorios que no eran de su competencia, en lo que respecta al planeamiento urbanístico, esto no se considera motivación suficiente para la alteración de los límites entre los términos municipales, pues dicho acto niega uno de los principales objetivos del desarrollo urbano sostenible, que defiende que este deberá ser colindante al suelo urbano del núcleo de población existente, condición que ni se ha dado ni se da entre el municipio de Fuengirola y el ámbito que pretenden segregar del término de Benalmádena, pues esto supondría la localización de una zona completamente aislada de su núcleo urbano a través de una extensa porción de terreno sin urbanizar.

Por el contrario, como se puede comprobar en las imágenes, dicha condición de desarrollo urbano sostenible se encuentra más que justificada en el término municipal de Benalmádena, pues el ámbito pretendido para la alteración de términos está plenamente integrado con el entramado urbano de este municipio.

Es tal la consolidación que tiene este ámbito controvertido con la malla urbana de Benalmádena, que existen servicios e infraestructuras que este municipio viene prestando al mismo. Ejemplo de ello es la red de tráfico rodado que sirve a la zona debatida, ya que a esta sólo es posible acceder desde Benalmádena mediante viales que conectan con Avd. del Higuero, en servicio desde hace más de veinte años, lo que garantiza la comunicación con el resto de infraestructuras y dotaciones del municipio.

Por otro lado, como se puede apreciar en el siguiente plano facilitado por la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena, EMABESA, el servicio de abastecimiento de agua potable en el citado ámbito se encuentra dentro del límite (marcado en color rojo) del área de cobertura de la empresa pública municipal de este Ayuntamiento.

Es importante comentar que la ordenación urbanística debe conseguir un desarrollo cohesionado del municipio en términos sociales, culturales, económicos, sanitarios y ambientales; garantizando la adecuada dotación de servicios, espacios y equipamientos públicos con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población.

En base a lo anterior, debe señalarse los numerosos equipamientos públicos y privados que dotan desde el municipio de Benalmádena al ámbito en cuestión en una ratio no superior a 2 kilómetros, tales como centros educativos o deportivos, áreas comerciales, farmacias, hipermercados, estación de servicios, etc. Cuestión no menos baladí, ya que cualquier vecino de la zona que quisiera servirse de las dotaciones del municipio de Fuengirola tendría que desplazarse un mínimo de siete kilómetros a través de la Autovía del Mediterráneo.

Por último, cabe mencionar el informe emitido el 13 de julio de 2021 por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el que se aclara que:

“La modificación del término municipal no supone la pérdida de vigencia o eficacia de los instrumentos de ordenación urbanística que se ven afectados por tal modificación, tampoco es causa de nulidad de los mismos; al contrario, como hemos dicho antes, siguen plenamente eficaces hasta que sean modificados, revisados, o, en su caso, anulados o sustituidos. Significa esto que, en el espacio controvertido, ahora delimitado como parte del término municipal de Benalmádena, sigue vigente el PGOU de Fuengirola hasta tanto, en lo que se refiere a este espacio, sea modificado, anulado o sustituido a iniciativa del municipio que ahora ostenta la competencia territorial sobre el mismo Benalmádena-.”

Por tanto, los vecinos pertenecientes al ámbito objeto no ven alterado lo más mínimo sus derechos y deberes sobre la propiedad de suelo.



3. CONCLUSIÓN:

En base a lo anterior, esta Sección de Planeamiento muestra la absoluta disconformidad respecto a la alteración de los términos municipales planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, considerando la falta de motivación de dicho acto según lo expuesto en el presente informe. “

5.- Informe del Jefe de la Unidad Jurídico - Administrativa de fecha de 14 de febrero en el que entre otras determinaciones se establece que para llevar a la práctica las determinaciones de la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020 (publicado en el BOJA de 27 de octubre de 2020) por la que se considera definitiva e inamovible la línea divisoria que delimita los términos municipales de Fuengirola y Benalmádena conforme al deslinde consentido y firme contenido en el acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874, se cursaron las correspondientes comunicaciones a distintas entidades y Administraciones para que adoptaran las medidas pertinentes (Catastro, Registro de la Propiedad, Instituto Nacional de Estadística, etc.). Algunas actuaciones están en trámite y otras ya han culminado (como por ejemplo las variaciones catastrales de los inmuebles afectados).

El Ayuntamiento de Fuengirola pretende alterar ese deslinde argumentando (de forma resumida) que un concreto espacio que pertenece a Benalmádena según el deslinde oficial y aprobado debe pasar a formar parte de Fuengirola, ofreciendo para ello diversos argumentos e invocando expresamente el art. 93.3.c de la Ley Autonómica 5/2010 que señala que “ **La alteración de términos municipales, mediante segregación-agregación**, no podrá suponer para ninguno de los municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los que viniesen obligados en función de su población. El municipio que experimente la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración. Si ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá fijarse una compensación económica a cargo del municipio acrecido. **Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de los siguientes casos:**

- a) Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro u otros limítrofes.
- b) Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar aquellos nuevos que imperativamente hubiere de prestar como consecuencia de un aumento de su población.
- c) **Cuando concurren otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico, histórico o administrativo que así lo aconsejen**

En otro orden de cosas, existen servicios que se vienen prestando por Benalmádena, como, por ejemplo, el suministro domiciliario de agua potable.

Se ha emitido informe por el Arquitecto municipal que acredita que el acceso.....

Por otro lado, se desconoce qué servicios presta el Ayuntamiento de Fuengirola en esa zona, pues es sabido que su PGOU contempla la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación por los propietarios particulares. El régimen de estas entidades se contiene en los artículos 67 y 68 del Reglamento de Gestión Urbanística, que disponen:

Artículo 67.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160045175335506631 en https://sede.benalmadena.es/validacion
--



La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de aquellas.

Artículo 68.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán sujetos los propietarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación a dicha obligación, cuando así se imponga por el Plan de Ordenación o por las bases de un programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones legales.
2. En el supuesto del número anterior, los propietarios habrán de integrarse en una Entidad de conservación.

Por ello, resulta dudosa la afirmación de Fuengirola sobre los gastos que le supone esta zona y la nula incidencia que tendría sobre la economía de Benalmádena. Y por ello se va a solicitar que Fuengirola confirme si esa zona tiene o no Entidad de Conservación.

En definitiva, toda la argumentación del Ayuntamiento de Fuengirola debe descartarse en base a la sólida fundamentación de la Orden de la Consejería de 15 de octubre de 2020. El Ayuntamiento de Fuengirola se confunde al equiparar hechos (cosas que suceden) con circunstancias (accidentes de tiempo, lugar, modo, etc., que están unidos a la sustancia de algún hecho o dicho).

Reforzando lo anterior hay una sólida doctrina jurisprudencial conforme a la cual el hecho de que se haya ordenado urbanísticamente un territorio de forma inadecuada (por pertenecer a otro municipio) no puede tener incidencia en el término municipal. Así, por ejemplo, la Sentencia 759/2021 de 8 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJA establece:

“No podemos obviar en este punto nuestros propios antecedentes que han tratado la cuestión del límite jurisdiccional entre ambos municipios. En nuestra sentencia de 9 de febrero de 2015 (ref. 676/10) se advirtió que no era viable la modificación de la linde intermunicipal por medio de un instrumento de planeamiento, en aquel caso la revisión del PGOU de 2010, que incluía el límite modificado tras la alegación de Constantino formulada tras la segunda aprobación inicial del PGOU de 1986, ampliando la jurisdicción de Benahavís, no obstante lo cual incluía la legalización en situación de fuera de ordenación de las construcciones existentes en la franja discutida, por lo que decíamos entonces que "(...) siendo pacífico entre las partes y así se concluye por lo demás de la documental presentada que con respecto a los terrenos conocidos como " DIRECCION000" los municipios de Marbella y Benahavís disputan su titularidad, así como que han sido urbanizados siguiendo las determinaciones del planeamiento de Banahavis, razón por la que el Ayuntamiento de Marbella acepto la realidad de las construcciones, acordando su legalización en el Plan que se impugna, clasificándolas como fuera de ordenación en suelo no urbanizable, la cuestión se centra en resolver si las determinaciones el Plan de Marbella, en cuanto que acuerdan legalizar dichas construcciones es acorde a derecho, resolución que, como se anunció anteriormente, no puede ser otra que la estimatoria del motivo aducido por la parte recurrente y ello por cuanto que aún cuando ateniéndonos a la literalidad de lo consignado en el Plan, los terrenos en disputa ,se reconocen como titularidad del municipio de Benahavís, una vez que en dicho instrumento urbanístico se acuerda la legalización de lo construido en él, es claro que no solo indirectamente se esta resolviendo acerca de su titularidad, delimitando los linderos entre ambos municipios, sino que además se esta proyectando el Plan a unos



terrenos pertenecientes a otro municipio, conclusiones ambas que no pueden ser acogidas".

Esta sentencia trajo como consecuencia el archivo del procedimiento de alteración de límites municipales que la Administración autonómica había iniciado al detectarse la contradicción entre la linde propuesta por el planeamiento y la linde histórica certificada en los archivos del Instituto Cartográfico de Andalucía, prevalentes a estos efectos sobre los datos gráficos catastrales que se indebidamente priorizaron en el trámite del PGOU de 1986. Este procedimiento de alteración de límites municipales fue definitivamente archivado por medio de orden de fecha 7 de septiembre de 2015, a la que precedió el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella en sesión extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2015, en el que a raíz de la anterior sentencia se ponía de manifiesto que el nuevo equipo de gobierno tenía como objetivo reconocer los límites oficiales fijados de forma definitiva el 14 de mayo de 1873, y que dichos límites iban a ser modificados en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente, reconociendo la demarcación territorial del municipio de Marbella, tal como consta en la documentación del Instituto Cartográfico de Andalucía.

La sentencia de esta Sala de fecha 12 de noviembre de 2018 (ref. 44/16) conoció del recurso frente a esta resolución administrativa de archivo del procedimiento de alteración de límites municipales de 7 de septiembre de 2015, y concluyó avalando la decisión de la Administración autonómica, pues se consideró injustificado modificar una linde histórica a impulso de la actividad de planeamiento de la Administración municipal, por el evidente riesgo que representaba de volatilidad e incerteza de los límites municipales el aceptar tal mutación vía actuación administrativa discrecional de planeamiento, asumiendo en definitiva la bondad del planteamiento expuesto en el Dictamen del Consejo Consultivo 478/2009, de 15 de julio, recabado por la entonces Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que apunta a la prevalencia de la demarcación oficial frente a la cartografía del planeamiento, exponiéndose que la subordinación del planeamiento general al lindero oficial del término municipal no solamente viene impuesta por ser el municipio el sustrato físico sobre el que se ejercen las competencias municipales, más aún las urbanísticas, sino también por la dependencia o subordinación en la que, respecto a la ordenación del territorio, se encuentra la ordenación urbanística, por lo que concluía la referida sentencia de la Sala de 12 de noviembre de 2018 que "la finalidad de solventar las discrepancias existentes entre los límites de los términos municipales resultantes de la documentación oficial y del planeamiento no necesariamente debe obtenerse por la vía de adaptar la oficial al planeamiento, acomodando la delimitación oficial de los términos municipales a la realidad fáctica existente o resultante de la aprobación y ejecución del planeamiento, sino por la de modificar los instrumentos de planeamiento respectivos y adaptar sus determinaciones a los límites territoriales resultantes de la delimitación oficial, so pena de conseguir el efecto de una alteración de términos municipales por la vía de lo fáctico cuando de los diversos informes obran tesen el expediente y de las alegaciones mismas de las partes en sus escritos de demanda y de contestación respectivos resulta que ambos municipios habían venido aprobando y ejecutando indebidamente las actuaciones urbanísticas en la zona afectada desde, al menos, el año 1985, por más que la ejecución lo hubiera sido de forma pacífica."

Y en parecidos términos se pronuncian las Sentencias del mismo órgano de 9/2/2015 (recurso 676/2010) y 12/11/2018 (recurso 44/2016).

Subsidiariamente a lo anterior se van a negar los hechos aducidos por Fuengirola sobre prestación de servicios a la zona debatida. No solo se trata de un dato irrelevante, como



se ha razonado anteriormente, sino que además existen servicios que se prestan por Benalmádena y otros por los propietarios. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el acceso a este espacio se realiza desde Benalmádena, por lo que el nuevo deslinde daría lugar a un enclave solo accesible desde Benalmádena.

El concepto jurídico indeterminado que se contiene en el art. 93.3.c de la Ley 5/2010 no ha sido justificado por Fuengirola que, prácticamente, se limita a exponer hechos, pero sin explicitar que consecuencias tienen los mismos.

El Ayuntamiento de Fuengirola no acredita ninguno de los motivos establecidos por el art. 93.3.c de la Ley 5/2010. Se afirma en la memoria:

“Mediante la documentación adjunta se justifican las circunstancias indicadas, es decir, la continua jurisdicción de Fuengirola sobre el territorio afectado. Además, de la documentación gráfica se acredita que con la alteración no se crea una zona aislada, ya que existe consolidación urbana de la zona con el resto del municipio de Fuengirola.”

La supuesta continua jurisdicción de Fuengirola sobre el territorio afectado no es una circunstancia, sino un hecho del que podrían derivarse circunstancias, pero ninguna circunstancia se alega por Fuengirola que pueda tener encaje en dicho precepto. Como consecuencia del replanteo acordado por Orden de la Consejería de 15 de octubre de 2020 se han producido o se van a producir variaciones en Catastro, Censos, Registro de la Propiedad, etc. Pero se trata de consecuencias normales, derivadas de la necesidad de corregir una situación anómala e incorrecta. Lo que no puede pretenderse, si se quiere actuar con un mínimo de seriedad y honestidad, es perpetuar una situación anómala acudiendo al artificio de alterar artificialmente las lindes.

Es decir, el hecho de que, por ejemplo, una serie de vecinos (en escasísimo número, por cierto) pasen de estar empadronados en Fuengirola a estarlo en Benalmádena es una consecuencia derivada del replanteo, pero no una circunstancia demográfica que justifique la alteración de lindes. Y ello sin necesidad de analizar que tal variación no supone perjuicio alguno para esos vecinos, pues no se tiene derecho subjetivo a elegir la vecindad, ya que esta condición está vinculada al municipio de residencia. Además, se arroga indebidamente el Ayuntamiento de Fuengirola la facultad de decisión de esos vecinos sobre su empadronamiento en Benalmádena. Téngase en cuenta que los residentes de este espacio ya se encuentran empadronados en Benalmádena

Mención especial merecen las causas económicas que se alegan por Fuengirola en justificación de la alteración del deslinde. En el informe económico que aporta Fuengirola se afirma (el subrayado es nuestro):

“Por consiguiente, respecto de la posibilidad y conveniencia, en el aspecto económico de la modificación que se pretende, de una parte, es clara la viabilidad económica de los municipios de Fuengirola y Benalmádena, tal y como resultarían de la modificación propuesta de los términos municipales, ya que la modificación es puramente formal en cuanto que la realidad jurídica y fáctica de ambos municipio no se verá alterada, pues tal y como la propuesta lo deja establecido es como en la actualidad y desde hace mucho tiempo viene siendo aceptado por ambos municipios, **que nada ganan ni pierden respecto de lo que ya vienen administrando.**”

Por ello, al no modificarse de hecho ni la capacidad fiscal de la población ni la riqueza imponible del nuevo territorio en relación con los gastos derivados de la prestación de los



servicios que como mínimo tienen que atender, **en nada afecta el expediente de alteración a las economías municipales afectadas respecto de la situación que ya tengan.**

.....
Tampoco, y siempre por el mismo motivo, existe justificación para plantear ninguna compensación territorial o económica del Municipio originarte de la alteración (Fuengirola) al que sufra la segregación (Benalmádena), pues, como se ha explicado, **la situación actual desde hace mucho tiempo es la misma que la resultante de la alteración**, pues - insistimos- ésta es puramente formal.

El silogismo que emplea Fuengirola resulta sorprendente: como la alteración de las lindes parece responder a una supuesta realidad fáctica, ningún perjuicio se va a causar a Benalmádena, pues nunca ha dispuesto de esos terrenos. Es como si a un particular que se hubiera visto privado indebidamente de la posesión de un terreno por parte de un vecino se le pretendiera privar de la propiedad y s ele dijera que ello no le afecta. Volvemos a repetir argumentos anteriores: una incorrecta apreciación o proyección de las lindes sobre el terreno físico, no puede implicar perjuicio alguno para quien ha sufrido y padecido. Más bien al contrario, Benalmádena deberá ser resarcida de los perjuicios económicos sufridos por la indebida ocupación que Fuengirola ha podido hacer de parte de su término municipal.

Por todo lo expuesto, procede que por el Pleno (requiriéndose a tal efecto mayoría absoluta) se acuerde:

1. Mostrar la disconformidad del Ayuntamiento de Benalmádena con la alteración de su término municipal planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola por considerar que no concurren motivos de ningún tipo para dicha alteración que supondría otorgar carta de naturaleza y legitimar la indebida ocupación que por vía de hecho pudo producirse en el pasado

FUNDAMENTOS JURIDICOS. -

PRIMERO. La legislación aplicable se encuentra contenida en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local, Decreto 157/2016, de 4 de octubre.

SEGUNDO. El término municipal se define en la LAULA en el art. 89 señalando que el término municipal es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias. El ejercicio de determinadas competencias y de actividades relacionadas con servicios públicos o con la iniciativa económica puede ser desarrollado fuera del término municipal cuando sea adecuado a su naturaleza y de acuerdo con los convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos o formas válidas en Derecho que se adopten.

2. El término municipal abarcará tanto el suelo como el vuelo y el subsuelo. En todo caso, sus modificaciones, así como las dimensiones perimetrales, longitudinales y de cabida se referirán al plano superficial, sin que a estos efectos sean válidas jurídicamente las alteraciones o intrusiones que afecten al vuelo o subsuelo de forma autónoma al suelo. No supondrán menoscabo del término municipal el ejercicio dentro de él de competencias o la titularidad de derechos reales o de dominio público de otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas.



3. El término municipal es continuo y no podrá exceder del territorio de una provincia.

Añade el art. 90 que la demarcación municipal, consistente en la actuación administrativa tendente a determinar tanto la extensión y límites de las entidades locales territoriales como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito espacial donde ejercen sus competencias, así como su capitalidad, corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por acuerdo adoptado mediante decreto.

3. El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal, que en ningún caso podrá implicar modificación de términos municipales.

TERCERO. En la LAULA se regulan supuestos de modificación del término municipal y entre ellos la alteración de términos municipales en el art. 93 estableciéndose que la alteración de términos municipales, mediante segregación-agregación, no podrá suponer para ninguno de los municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los que viniesen obligados en función de su población. El municipio que experimente la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración. Si ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá fijarse una compensación económica a cargo del municipio acrecido. Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de los siguientes casos:

- a) Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro u otros limítrofes.
- b) Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar aquellos nuevos que imperativamente hubiere de prestar como consecuencia de un aumento de su población.
- c) Cuando concurren otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico, histórico o administrativo que así lo aconsejen.

En este caso el Ayuntamiento de Fuengirola no ha justificado ninguno de los tres supuestos, tal y como lo expone de forma detallada el Jefe de la Unidad Jurídico Administrativa en su informe de 14 de febrero de 2022.

En la Orden de 9 de julio de 2010, se señala que de conformidad con lo establecido en el art. 94 del decreto 18572005 , de 30 de agosto , los límites establecidos son inamovibles , de forma que cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites existentes en la actualidad , o que se fijen en el futuro , cualquiera que sea la fecha de las actas en que se hubieran quedado establecidos , no procederá nueva fijación , salvo casos excepcionales , en que documentalmente se justifiquen de forma fehaciente errores materiales o vicios del procedimiento de delimitación.

Sobre la inamovilidad de los límites establecidos , independientemente de la fecha en la que se fijen , la doctrina jurisprudencial ha sido uniforme a lo largo del tiempo , manifestada, entre otras, en sentencias del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1967, 30 de octubre de 1979, 26 de febrero de 1983, 10 de diciembre de 1984º 1 de julio de 20068, así como la doctrina del Consejo de Estado (dictámenes 1312, 2130, 40.334, , 1245/93, 1625/93, 897/99) pudiendo sintetizarse su línea argumental de la siguiente forma :



Para resolver los expedientes de deslinde debe prevalecer el deslinde más antiguo y en el que haya existido avenencia.

Solo a falta de documentos expresivos de los deslindes anteriores, deberán tenerse en cuenta aquellos otros documentos que indiquen o reflejen de modo preciso la situación de los terrenos en cuestión, y habrá de atenderse a otros actos reveladores del ejercicio de potestades administrativas en la zona controvertida.

Los acuerdos administrativos firmes no caducan por el tiempo.

El procedimiento de deslinde es eminentemente administrativo y en nada incide sobre el derecho de propiedad de determinadas fincas.

En la Orden de 15 de Octubre de 2020 se afirma que se recoge que teniendo en cuenta que el mapa topográfico deriva de los deslindes efectuados y que estos, una vez consentidos, cualquiera que sea su fecha, son firmes e inamovibles, habiendo transcurrido más de un siglo desde las referidas actuaciones, la Comunidad Autónoma de Andalucía impulsó desde el año 2007, al amparo de sus competencias, el replanteo sobre el terreno de las líneas límites descritas en las actas de deslinde, con la finalidad de dotarlas de coordenadas precisas en el Sistema Geodésico de Referencia actual (ETRS89). En definitiva, estas actuaciones posteriores tienen como objeto trasladar a la realidad geográfica actual el trazado de la línea entre mojones acordada en su día por los representantes de los ayuntamientos afectados, habida cuenta de las variaciones físicas que se han venido produciendo en el territorio.

Merece subrayarse el elevadísimo grado de objetividad y concreción en la referenciación geográfica que permiten las modernas técnicas cartográficas utilizadas por el instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en cuyo informe de replanteo de la línea que nos ocupa, realizado a requerimiento del órgano instructor, se evidencia su rigor y profesionalidad en su trabajo, desarrollado al amparo de las instrucciones técnicas a las que han de ajustarse los informes de deslinde y replanteo de los términos municipales, publicadas en el BOJA de 17 de abril de 2017.

Por lo tanto, no hay ninguna duda de cuáles son las lindes entre Benalmádena y Fuengirola, sin que se haya justificado la procedencia de la alteración.

En Dictamen 202/2010 de 14 de abril del Consejo Consultivo de Andalucía se determina que "...en materia de deslindes de términos municipales, la doctrina jurisprudencial ha sido uniforme a lo largo del tiempo, pudiendo sintetizarse su línea argumental de la siguiente forma:

Son prevalentes los deslindes anteriores consentidos (en nuestro caso el de 24 de septiembre de 1874) ; cuando no existen deslindes anteriores en que apoyar una solución al trazado de la línea discutida, habrá de atender a los actos reveladores del ejercicio de potestades administrativas en la zona controvertida; por último, en defecto de los anteriores datos, habrá de acudir a los documentos referentes a fincas o heredades que se encuentren enclavadas en el terreno litigioso, y demás pruebas que contribuyan a formar un juicio sobre la cuestión planteada y de las que pueda deducirse con certeza a cuál de las partes favorece la posesión de hecho.....



En este sentido, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 94 del Decreto 185/2005, a cuyo tenor “cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites existentes en la actualidad, o que se fijen en el futuro, cualquiera que sea la fecha de las actas en que hubieran quedado establecidos, no procederá nueva fijación, salvo casos excepcionales, en que documentalmente se justifiquen de forma fehaciente errores materiales o vicios del procedimiento de delimitación. También procederá un nuevo deslinde comprobatorio cuando algún Ayuntamiento cuestione la corrección del deslinde por existencia de duda razonable sobre el trazado de la línea límite o el lugar de los hitos o mojones, debido a la pérdida de estos o de la desaparición o alteración de elementos permanentes o accidentes geográficos que se hubiesen usado para la descripción de dicha línea

..... La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2008 ha señalado que “según se infiere de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (SS. de 23 de octubre de 1902, 20 de marzo y 15 de noviembre de 1928, 4 de junio de 1941, 30 de octubre de 1979, 26 de febrero de 1983 y 10 de diciembre de 1984, entre otras) y doctrina del Consejo de Estado (dictámenes 1.312, 2.130, 40.334/39.764, 53.447, 1.245/93, 1.625/93, 897/99), la Administración, para resolver los expedientes de deslinde, ha de basarse, en primer lugar, en lo que resulte de deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios interesados y sólo a falta de documentos expresivos de deslindes anteriores, deberán tenerse en cuenta aquellos otros documentos que, aun no siendo de deslinde, indiquen o reflejen de modo preciso la situación de los terrenos en cuestión, así como por último, los que se refieran a fincas o heredades que se encuentren enclavadas en el terreno litigioso y las demás pruebas que contribuyan a formar juicio sobre la cuestión planteada y de los que pueda deducirse con certeza a cuál de las partes favorece la posesión de hecho. La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1967 dice expresivamente, al respecto, “que las Reales Ordenes de 11 de mayo de 1898 y 4 de enero de 1906 habían reconocido ya que era jurisprudencia constante que los deslindes consignados en un documento público no pueden modificarse por un nuevo deslinde que carecería de finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones sobre límites jurisdiccionales en pueblos limítrofes cuando dichos límites hayan sido fijados y reconocidos de común acuerdo entre los representantes de los pueblos interesados, lo que reiteraron las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de abril, 30 de mayo y 13 de diciembre de 1930 y de 7 de marzo de 1932”, estableciendo la doctrina de que, en materia de deslindes de términos municipales, hay que estar “en primer término a la línea que resulta de deslindes anteriores consentidos por los Ayuntamientos interesados”, añadiendo que “los acuerdos administrativos firmes no caducan por el transcurso del tiempo”. En este sentido, cabe señalar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1967 refiere que las Reales Órdenes de 11 de mayo de 1898 y 4 de enero de 1906 habían reconocido ya que era jurisprudencia constante que los deslindes consignados en un documento público no pueden modificarse por un nuevo deslinde que carecería de finalidad y que no pueden suscitarse cuestiones sobre límites jurisdiccionales en pueblos limítrofes cuando dichos límites hayan sido fijados y reconocidos de común acuerdo entre los representantes de los pueblos interesados, lo que reiteraron las SSTs. de 26 de abril, 30 de mayo y 13 de diciembre de 1930 y 7 de marzo de 1932, estableciendo la doctrina de que, en materia de deslindes de términos municipales, hay que estar “en primer término a la línea que resulta de deslindes anteriores consentidos por los Ayuntamientos interesados”, añadiendo que “los acuerdos administrativos firmes no caducan por el transcurso del tiempo”

..... en la elaboración de los referidos instrumentos de planeamiento se ha de utilizar, como ya se anticipó, la documentación depositada en el Instituto Geográfico Nacional. En



este sentido, resulta elocuente el artículo 83.2 del Reglamento de demarcación municipal de Andalucía (Decreto 185/2005, de 30 de agosto), cuando señala que la demarcación municipal de Andalucía actual “es la resultante de la documentación, cuadernos de campo, actas y correspondiente cartografía custodiados en el Instituto Geográfico Nacional, así como la derivada de decisiones firmes administrativas o jurisdiccionales”, añadiendo en su punto 3 que “los documentos y elementos cartográficos enumerados en el apartado anterior, habrán de ser tenidos en cuenta al elaborar toda clase de documentos cartográficos que hayan de surtir efectos en relación con el territorio andaluz”.

Podemos deducir, pues, que es obligatoria, en la elaboración del planeamiento urbanístico, la utilización de la cartografía oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, considerada como tal la realizada por las Administraciones Públicas de Andalucía, o bajo su dirección y control, así como la realizada conforme a los criterios y requisitos por la normativa estatal correspondiente. Este es el mandato contenido en el artículo 4 del Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo el Instituto de Cartografía de Andalucía el que elaborará los mapas correspondientes desde la entrada en vigor del Decreto 185/2005, según dispone su artículo 82.4, teniendo en cuenta los documentos y elementos cartográficos custodiados en el Instituto Geográfico Nacional.

A la vista de lo apuntado hasta este momento, no cabe duda de que, en el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbanística correspondiente, la cartografía que se ha de utilizar de forma obligada es la oficial. Solamente de esta manera se conseguirá el objetivo imprescindible que ha de servir de presupuesto al instrumento de planeamiento, es decir, la coincidencia exacta entre los límites de la demarcación municipal oficial, con los límites que sobre esa demarcación se tracen en el citado instrumento.....

En nuestro caso, la línea divisoria que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola es la que procede del deslinde consentido y firme contenido en el Acta de 24 de septiembre de 1874 y que de acuerdo con la resolución de 15 de octubre de 2020 tiene la consideración de definitiva e inamovable.

CUARTO.- En cuanto al procedimiento, la regulación se encuentra contenida en el art. 95 y ss. de la LAULA estableciendo que **los** procedimientos para la creación y supresión de municipios o la alteración de sus términos podrá iniciarse:

- a) Por uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros.
 - b) Por la diputación provincial de la provincia en que radiquen.
 - c) Por la consejería competente sobre régimen local de la Junta de Andalucía.
2. De promoverse el procedimiento por varios de los ayuntamientos interesados en realizar una determinada modificación, se constituirá una comisión mixta integrada por representantes de los mismos, para la formulación única de pareceres, en su caso, sobre todos aquellos aspectos que hubieran de quedar resueltos en el expediente.
3. En ningún caso podrá iniciarse un procedimiento de modificación de términos municipales si no hubiese transcurrido un plazo de cinco años desde la desestimación por la Junta de Andalucía de otro sustancialmente igual.



1. Los expedientes de los procedimientos de modificación de términos municipales estarán integrados por la siguiente documentación:

- a) Memoria que contenga una exposición detallada de la concurrencia de las circunstancias exigidas, en cada caso, por esta ley y demás motivos que justifiquen la modificación propuesta.
- b) Cartografía en la que se refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como la que se pretenda alcanzar.
- c) Informe económico en el que se justifique la posibilidad y conveniencia, en este aspecto, de la modificación que se pretende.

2. En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio, además de la documentación exigida en el apartado anterior, figurará la siguiente:

- a) Propuesta que contenga el nombre del nuevo municipio, con indicación del núcleo de población en el que ha de radicar su capitalidad, caso de que tuviese más de uno.
- b) Propuesta relativa al régimen especial de protección de acreedores con respecto a las obligaciones asumidas por el nuevo municipio.
- c) Propuesta de atribución al nuevo municipio de bienes, créditos, derechos y obligaciones procedentes del municipio originario y régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales, así como las bases que se establezcan para resolver cualesquiera de las cuestiones que pudieran suscitarse entre ellos en el futuro.

3. En los expedientes de fusión de municipios también figurará la propuesta a que se refiere el apartado 2 a de este artículo.

1. La consejería competente sobre régimen local, una vez recibida la iniciativa de modificación con la documentación correspondiente, comprobará si ha surgido de todos los municipios afectados o solo de parte de ellos.

2. La consejería, antes de cualquier otro trámite, concederá audiencia por plazo de cuatro meses a los municipios que no hayan participado en la iniciativa, a fin de que puedan pronunciarse sobre la misma, aportando en su caso la documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.

3. Cumplido en su caso el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se someterá a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios insertos en los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia, así como en los tabloneros de anuncios y sedes electrónicas del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.

4. La consejería, cumplido el trámite anterior, recabará el dictamen de cuantos organismos públicos y servicios administrativos estime convenientes. También podrá solicitar de quienes promovieron la iniciativa que completen, desarrollen o justifiquen algún punto respecto de la documentación aportada.

5. Una vez completado el expediente, se solicitará el parecer sucesivo de la diputación provincial y del Consejo Andaluz de Concertación Local, que deberán ser emitidos en el plazo de tres meses.

6. Por último, se remitirán las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucía, y simultáneamente se pondrán en conocimiento de la Administración del Estado las características y datos principales del expediente.

En este caso, se recibe por el Ayuntamiento de Benalmádena con fecha de 16 de noviembre de 2021 escrito de la Dirección General de Administración Local otorgando audiencia por un plazo de cuatro meses. En dicho escrito se señala que, desde el punto de vista formal, por parte del Ayuntamiento de Fuengirola se han aportado todos los documentos legalmente exigibles.



En este momento procede que el Ayuntamiento de Benalmádena se pronuncie sobre la alteración, mediante acuerdo de pleno adoptado por mayoría absoluta de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.2 b) y 47.2 a) de la LBRL.

CONCLUSIONES.-

PRIMERA.- En base a los fundamentos jurídicos expuestos se concluye que procede mostrar la disconformidad del Ayuntamiento de Benalmádena con la alteración de su término municipal planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, alteración que se tramita en el expediente 1/2021 /AMU-JARH de la Dirección General de Administración Local, por, entre otros, los motivos expuestos y por considerar que no concurren motivos de ningún tipo para dicha alteración.

SEGUNDA.- Desde el punto de vista procedimental procede en este momento que el Ayuntamiento de Benalmádena se pronuncie sobre la alteración, mediante acuerdo de pleno adoptado por mayoría absoluta de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22.2 b) y 47.2 a) de la LBRL.

Tal es el parecer de la funcionaria que suscribe sometiéndose a cualquier otra mejor opinión fundamentada en derecho”.

Informe de la Ud. Jurídico-Admtiva. de fecha 14/02/2022

“En relación con el expediente de alteración territorial de municipio incoado por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía (Expte. 1/2021) se informa y propone:

Resultan los siguientes HECHOS:

PRIMERO.- Mediante oficio de 9 de noviembre de 2021 la citada Dirección General pone en conocimiento de este Ayuntamiento la incoación del expediente reseñado a instancias del vecino Ayuntamiento de Fuengirola y concede plazo para que esta entidad pueda pronunciarse al respecto y aportar la documentación que estime oportuna, apercibiendo que en defecto de pronunciamiento expreso se entenderá que se presta conformidad. A tal efecto se acompaña diversa documentación aportada por el Ayuntamiento de Fuengirola en justificación de su pretensión de que se alteren las lindes intermunicipales.

SEGUNDO.- En esencia, el planteamiento de Fuengirola (aprobado por unanimidad de su Pleno) es el siguiente. Mediante Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020 (publicado en el BOJA de 27 de octubre de 2020) se considera definitiva e inamovible la línea divisoria que delimita los términos municipales de Fuengirola y Benalmádena conforme al deslinde consentido y firme contenido en el acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874. Pese a la rotundidad de semejante declaración, Fuengirola pretende alterar ese deslinde argumentando (de forma resumida) que un concreto espacio que pertenece a Benalmádena según el deslinde oficial y aprobado debe pasar a formar parte de Fuengirola, ofreciendo para ello diversos argumentos e invocando expresamente el art. 93.3.c de la Ley Autonómica 5/2010. Este precepto dice (en lo que interesa, siendo nuestros los subrayados):

“Artículo 93. La segregación de términos municipales.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 14160045175335506631 en https://sede.benalmadena.es/validacion
--



1. Se entiende por **segregación** de un término municipal la **separación de parte del territorio, bien para la creación de uno distinto o bien para ser agregado a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia, no comportando en este último caso creación ni supresión de municipios.**

.....
3. **La alteración de términos municipales, mediante segregación-agregación**, no podrá suponer para ninguno de los municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los que viniesen obligados en función de su población. El municipio que experimente la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración. Si ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá fijarse una compensación económica a cargo del municipio acrecido. **Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de los siguientes casos:**

- a) Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro u otros limítrofes.
- b) Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar aquellos nuevos que imperativamente hubiere de prestar como consecuencia de un aumento de su población.
- c) **Cuando concurren otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico, histórico o administrativo que así lo aconsejen.**

TERCERO. En definitiva, se trata de un espacio, parcialmente urbanizado recientemente, cuya pertenencia a Benalmádena había pasado desapercibida, circunstancia que fue aprovechada por Fuengirola, suponemos que de forma no intencionada, para ejercer algunas competencias. Ello resulta especialmente curioso si se tiene en cuenta que la zona en cuestión se encuentra en el punto más distante posible del núcleo urbano de Fuengirola y sin conexión con otras zonas urbanas del municipio vecino. Tan es así que este espacio lindaba con zonas urbanas ya consolidadas de Benalmádena y solo era accesible mediante vías urbanas de Benalmádena.

Las distintas corporaciones municipales que se han sucedido, desde que se tuvo conocimiento de esta invasión del término municipal, han llevado a cabo diversas actuaciones para poner fin a las mismas. Así, por ejemplo, se interpuso el recurso contencioso-administrativo 661/2011 contra la aprobación del PGOU de Fuengirola por considerar que era incorrecto que éste ordenase parte del término benalmadense. Ya desde este momento se estaba mostrando la oposición a una situación fáctica irregular. Y esta situación, contrariamente a lo que sostiene el Ayuntamiento de Fuengirola, no se remonta al principio de los tiempos. En efecto, como se deduce de los propios documentos que Fuengirola aporta al expediente, tal situación databa de apenas 10 años antes del referido recurso jurisdiccional. Por ejemplo, el documento 6 de los aportados por Fuengirola al expediente (titulado Informe de Gestión e Inspección Tributaria) especifica que el inmueble más antiguo incorporado a los padrones de gestión tributaria causó alta el 1 de julio de 2002.

El recurso contencioso-administrativo que se ha referenciado finalizó con sentencia desestimatoria. No anuló el PGOU de Fuengirola, razonando para ello que la incoación de un expediente encaminado a alterar los términos municipales justificaba, de forma provisional, que ese PGOU ordenara terrenos de otro municipio a expensas del resultado de ese expediente de alteración de términos municipales.



No es cierto, por tanto, que Benalmádena haya consentido la pretensión que ahora articula Fuengirola. Por el contrario, quien se ha aquietado ante las lindes oficiales y reales ha sido el Ayuntamiento de Fuengirola. Así se reconoce expresamente en la Orden de la Consejería ya reseñada de 15 de octubre de 2020, en la que se indica

2.ª Alegación. Si bien el Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, de 30 de noviembre de 2009, acordó incoar el procedimiento de alteración territorial entre su municipio y el de Benalmádena, tal procedimiento no se ha iniciado por la administración autonómica.

Es cierta esta afirmación. El 4 de diciembre de 2009 tuvo entrada, en la entonces Consejería de Gobernación, el referido acuerdo plenario. Mediante Oficio, de fecha 15 de diciembre de 2009, se informó al Ayuntamiento de Fuengirola que, de conformidad con la legislación aplicable en tal fecha, solo cuando en fase municipal se hubieran cumplimentado ciertos trámites legalmente y cuando el Ayuntamiento procediera a la ratificación de la iniciativa de alteración territorial mediante nuevo acuerdo de su Pleno, remitiendo todo lo actuado a la administración autonómica, «finalizará la fase municipal del procedimiento (...)» y «se iniciará la fase autonómica».

El 18 de diciembre de 2009 se recibió documentación complementaria facilitada por el Ayuntamiento de Fuengirola. Por Oficio, con fecha de salida de 26 de enero de 2010, (del que consta acuse de recibo por el Ayuntamiento de Fuengirola el 27 de enero de 2010), además de indicarse ciertas carencias en la documentación aportada, se reiteró la necesidad de que el Ayuntamiento de Fuengirola ratificara la iniciativa de alteración territorial mediante nuevo acuerdo de su Pleno, y de que se procediera a remitir todo lo actuado para dar por concluida la fase municipal.

Hasta la fecha el Ayuntamiento de Fuengirola no ha aportado la documentación legalmente exigida para que pueda iniciarse el procedimiento autonómico de alteración de términos municipales, por lo que no puede considerarse, en ningún caso, que el mismo se halle en tramitación en la administración autonómica, donde ni siquiera se ha iniciado.

Es decir, que ya en 2009 Fuengirola conocía el deslinde real y nada hizo al respecto para modificarlo. El alta en los padrones tributarios, como se ha dicho, data de 2002, por lo que no puede admitirse que desde tiempo inmemorial Fuengirola haya ejercido su jurisdicción. Lo que sí sorprende es que desde esa época haya seguido el municipio vecino obcecado en una situación no ajustada a derecho sin tampoco haber promovido su regularización.

CUARTO.- En orden a determinar el planeamiento urbanístico aplicable a la zona en cuestión, se emitió informe por quien suscribe el 21 de diciembre de 2020 en el que se afirmaba:

“INFORME.-

Conforme a las previsiones del Decreto autonómico 157/2016 y conforme a los dictámenes emitidos por órganos consultivos la situación generada por una falta de concordancia entre los ámbitos de los instrumentos de ordenación urbanística y los términos municipales han de resolverse atendiendo a unos criterios de prudencia que, fundamentalmente, consigna no perjudicar a terceros. En el caso que nos ocupa, Fuengirola, de forma indebida ordenó urbanísticamente, a través de su PGOU, esos suelos. Con independencia de que se haya culminado o no su edificación, resulta evidente que ha de respetarse esa ordenación urbanística para no causar perjuicios ni generar inseguridad en terceros ajenos a la operación de deslinde. Por tanto, hasta que no se ordenen



por parte de Benalmádena esos terrenos, su clasificación, calificación y parámetros urbanísticos siguen siendo los mismos que les reconocía el PGOU de Fuengirola.”

Para confirmar esta conclusión y en aplicación del principio de coordinación y colaboración interadministrativa se recabó informe de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial competente en materia de Ordenación del Territorio), que en fecha 13/7/2021 respondió en el siguiente sentido:

“TERCERO .-

El Ayuntamiento ejerce sus competencias en el territorio que constituye su término municipal artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)- siendo los elementos del municipio el territorio, la población y la organización -artículo 11.2 LBRL-. La delimitación del territorio de los municipios de Fuengirola y Benalmádena, realizada mediante actuaciones de replanteo, en virtud de la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020, supone la fijación del territorio de cada uno de estos municipios en el límite que comparten. La delimitación realizada surte efectos desde la fecha de publicación de la Orden (27 de octubre de 2020); a partir de esta fecha, pues, la competencia territorial para el ejercicio de cualquier atribución o competencia municipal, incluidas las de contenido urbanístico, se atribuirá al municipio al que le haya correspondido el territorio sobre el que recae.

Por tanto, cada municipio ejerce las competencias urbanísticas, sin ningún tipo de limitación o reserva, sobre el territorio que le corresponde tras la delimitación, desde la fecha de publicación de la Orden.

CUARTO .-

De conformidad con el apartado 1 del artículo 35 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.(LOUA) “Los instrumentos de planeamiento tendrán vigencia indefinida” por lo que una vez aprobados y publicados se mantendrán en vigor hasta que no sean modificados, revisados, o, en su caso, anulados o sustituidos por otro.

La consulta se centra en un espacio que hasta la delimitación de los términos municipales, operada por la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020, se aceptaba que pertenecía al término municipal de Fuengirola, y, tras esta delimitación ha quedado dentro del término municipal de Benalmádena. La ordenación de esta zona se realizó por el PGOU de Fuengirola por ser el Ayuntamiento con competencia territorial, al admitirse por todos en el momento de la tramitación y aprobación del PGOU, que pertenecía a su término municipal; este suelo no ha sido ordenado nunca por el PGOU de Benalmádena.

La modificación del término municipal no supone la pérdida de vigencia o eficacia de los instrumentos de ordenación urbanística que se ven afectados por tal modificación, tampoco es causa de nulidad de los mismos; al contrario, como hemos dicho antes, siguen plenamente eficaces hasta que sean modificados, revisados, o, en su caso, anulados o sustituidos. Significa esto que en el espacio controvertido, ahora delimitado como parte del término municipal de Benalmádena, sigue vigente el PGOU de Fuengirola hasta tanto, en lo que se refiere a este espacio, sea modificado, anulado o sustituido a iniciativa del municipio que ahora ostenta la competencia territorial sobre el mismo - Benalmádena-.

Procede, pues, la innovación del PGOU de Benalmádena para ordenar este espacio, conforme a la normativa que resulte de aplicación, lo que conllevará la sustitución del PGOU de Fuengirola aplicable en la actualidad. De la misma forma procede la modificación del PGOU de Fuengirola para ajustarlo a su término municipal excluyendo de



su ordenación el espacio que ahora ha quedado delimitado como parte del término municipal de Benalmádena.

Estas modificaciones del PGOU deberán realizarse siguiendo los trámites establecidos en la LOUA debiendo formularse consulta a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga para que se pronuncie acerca del trámite ambiental a seguir.”

QUINTO.- Para llevar a la práctica las determinaciones de la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020 (publicado en el BOJA de 27 de octubre de 2020) por la que se considera definitiva e inamovible la línea divisoria que delimita los términos municipales de Fuengirola y Benalmádena conforme al deslinde consentido y firme contenido en el acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874, se cursaron las correspondientes comunicaciones a distintas entidades y Administraciones para que adoptaran las medidas pertinentes (Catastro, Registro de la Propiedad, Instituto Nacional de Estadística, etc.). Algunas actuaciones están en trámite y otras ya han culminado (como por ejemplo las variaciones catastrales de los inmuebles afectados).

En otro orden de cosas, existen servicios que se vienen prestando por Benalmádena, como, por ejemplo, el suministro domiciliario de agua potable.

Se ha emitido informe por el Arquitecto municipal (11/02/2022) que acredita las circunstancias fácticas a tener en cuenta y la inconveniencia de aceptar la segregación planteada.

Por otro lado, se desconoce qué servicios presta el Ayuntamiento de Fuengirola en esa zona, pues es sabido que su PGOU contempla la constitución de una Entidad Urbanística de Conservación por los propietarios particulares. El régimen de estas entidades se contiene en los artículos 67 y 68 del Reglamento de Gestión Urbanística, que disponen:

Artículo 67.

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de aquellas.

Artículo 68.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán sujetos los propietarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación a dicha obligación, cuando así se imponga por el Plan de Ordenación o por las bases de un programa de actuación urbanística o resulte expresamente de disposiciones legales.
2. En el supuesto del número anterior, los propietarios habrán de integrarse en una Entidad de conservación.

Por ello, resulta dudosa la afirmación de Fuengirola sobre los gastos que le supone esta zona y la nula incidencia que tendría sobre la economía de Benalmádena. Y por ello se va a solicitar que Fuengirola confirme si esa zona tiene o no Entidad de Conservación.

Son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El primer argumento para oponernos a la alteración de lindes que se plantea por el vecino municipio se encuentra en la Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 15 de octubre de 2020 (publicada en el BOJA de 27 de octubre de 2020). La linde fijada por dicha resolución tiene la



consideración de definitiva e inamovible. Resultan invocables para desvirtuar las alegaciones del Ayuntamiento de Fuengirola los argumentos que en dicha resolución se emplean para dar respuesta a las distintas alegaciones, que se van a transcribir por su brillantez y aptitudes pedagógicas.

4.ª Alegación. Por el Ayuntamiento de Fuengirola se alega la virtualidad del planeamiento urbanístico para la delimitación del término municipal, afirmando que la única delimitación efectiva territorial fue aprobada mediante sendas Resoluciones del entonces Ministerio de la Vivienda, de 8 de marzo y 10 de junio de 1969, por las que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Fuengirola, en el que, entre otras cuestiones, se define la línea delimitadora entre su término municipal y el de Benalmádena, subrayándose el carácter pacífico, consolidado y consentido de ese límite por ambos municipios, tanto por la falta de actuaciones impugnatorias por parte del Ayuntamiento de Benalmádena hacia los sucesivos instrumentos de planeamiento urbanístico de Fuengirola, como también por la adecuación de la planificación del urbanismo de Benalmádena a la referida línea delimitadora, obrando esta como referencia fronteriza hasta donde este último municipio ejerce sus competencias (ordenación territorial, planes parciales, licencias ...), lo cual avalaría este límite señalado en el planeamiento urbanístico, al amparo de la doctrina de los actos propios. Benalmádena y Fuengirola han venido respetando desde hace décadas la delimitación entre sus términos municipales obrante en el referido PGOU y en sus sucesivas actualizaciones, dotadas de expresiones gráficas y planimétricas de enorme precisión, ejerciendo sus respectivas competencias en materia de aplicación de padrones tributarios y en la imposición de tributos (en particular el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el que resulta esencial la radicación del objeto gravado), así como ordenando sus censos a efectos poblacionales y electorales.



No es posible estimar esta alegación. En cuanto a la diferencia observada entre los datos identificativos de la propuesta de la línea límite con respecto al planeamiento urbanístico, es necesario traer a colación el Dictamen 478/2009, de 15 de julio, emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía en respuesta a una consulta facultativa que le fue remitida por el entonces Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, con objeto de disponer de argumentaciones jurídicas para solventar, en el ámbito competencial de su Consejería, la problemática surgida en aquellos supuestos en los que se advertían discordancias entre el deslinde oficial del término municipal y los límites del suelo clasificado por el planeamiento urbanístico.

Tal dictamen se pronuncia en el sentido de que una integración sistemática de la legislación andaluza sobre ordenación del territorio, demarcación municipal y ordenación urbanística, deja pocas dudas sobre la posición jerárquica prevalente de la ordenación territorial sobre la urbanística, de forma que el instrumento por excelencia de ordenación urbanística, esto es, el PGOU, se ha de acomodar necesariamente al Plan de Ordenación del Territorio, si existiere, o a la figura de ordenación territorial o con incidencia sobre el territorio adoptada.

En suma, que al constituir la demarcación municipal una actuación con incidencia en la ordenación del territorio, la ordenación urbanística está subordinada a dicha ordenación del territorio, de suerte que el Plan General no puede, en ningún caso, alterar el término municipal, sino que el planeamiento general estaría subordinado al lindero oficial del término municipal.

En este sentido, según lo expresado en el Acta de deslinde de 24 de septiembre de 1874 y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2. b) del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, la línea límite entre Benalmádena y Fuengirola tiene el carácter de línea definitiva. Al

respecto, los artículos 2.1. c), 4.1. y 10.1 del mismo Decreto 157/2016, de 4 de octubre, subrayan la condición de inamovilidad de las líneas que hubieran sido acordadas entre dos municipios limítrofes, con independencia de la fecha en que hubieran quedado establecidas.

5.ª Alegación. El Ayuntamiento alegante afirma que el saneamiento y la recogida de residuos sólidos urbanos se ejerce por Fuengirola en todo su término municipal, incluso en el entorno que es cuestionado por Benalmádena, con la excepción del suministro de agua en urbanizaciones sitas en aquella zona cuando no cuentan con caudales suficientes, lo que conlleva su prestación por empresas municipales de agua pertenecientes a uno u otro municipio, en función de convenios realizados al respecto.

No puede estimarse esta alegación. Además de la interdependencia que guarda su contenido con la improcedencia de señalar la línea delimitadora en virtud de la planificación urbanística, la insoslayable premisa de la autonomía local para que dos municipios limítrofes puedan gestionar asuntos de su competencia en el marco de la legalidad, se halla plenamente amparada por el artículo 4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, de modo que supondría una injerencia en tal ámbito que la administración autonómica andaluza emitiera algún juicio de valor al respecto, como pudiera ser concretar la línea límite entre ambos en función de las competencias municipales ejercidas en cierto territorio mediante convenio o cualquier otra forma de colaboración intermunicipal.



1.ª Alegación. La inamovilidad de la línea límite acordada en el pasado no puede quedar desvirtuada por el hecho de que el Ayuntamiento de Fuengirola haya invadido el ámbito territorial del municipio colindante (ni siquiera aunque tal extralimitación haya sido realizada de buena fe), y sin que proceda sustentarla en el ejercicio de competencias urbanísticas, censales, tributarias, etc, por dicho Ayuntamiento.

La aceptación de esta alegación se sustenta en la argumentación jurídica expresada en la respuesta a la alegación 4.ª del Ayuntamiento de Fuengirola, referida en el Fundamento de Derecho Quinto.

En definitiva, toda la argumentación del Ayuntamiento de Fuengirola debe descartarse en base a la sólida fundamentación de la Orden de la Consejería de 15 de octubre de 2020. El Ayuntamiento de Fuengirola se confunde al equiparar hechos (cosas que suceden) con circunstancias (accidentes de tiempo, lugar, modo, etc., que están unidos a la sustancia de algún hecho o dicho).

SEGUNDO.- Reforzando lo anterior hay una sólida doctrina jurisprudencial conforme a la cual el hecho de que se haya ordenado urbanísticamente un territorio de forma inadecuada (por pertenecer a otro municipio) no puede tener incidencia en el término municipal. Así, por ejemplo, la Sentencia 759/2021 de 8 de abril de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJA establece:

“No podemos obviar en este punto nuestros propios antecedentes que han tratado la cuestión del límite jurisdiccional entre ambos municipios. En nuestra sentencia de 9 de febrero de 2015 (rec. 676/10) se advirtió que no era viable la modificación de la linde intermunicipal por medio de un instrumento de planeamiento, en aquel caso la revisión del PGOU de 2010, que incluía el límite modificado tras la alegación de Constantino formulada tras la segunda aprobación inicial del PGOU de 1986, ampliando la jurisdicción de Benahavís, no obstante lo cual incluía la legalización en situación de fuera de ordenación de las construcciones existentes en la franja discutida, por lo que decíamos entonces que "(...) siendo pacífico entre las partes y así se concluye por lo demás de la documental presentada que con respecto a los terrenos conocidos como "DIRECCION000" los municipios de Marbella y Benahavís disputan su titularidad, así como que han sido urbanizados siguiendo las determinaciones del planeamiento de Banahavis, razón por la que el Ayuntamiento de Marbella acepto la realidad de las construcciones, acordando su legalización en el Plan que se impugna, clasificándolas como fuera de ordenación en suelo no urbanizable, la cuestión se centra en resolver si las determinaciones el Plan de Marbella, en cuanto que acuerdan legalizar dichas construcciones es acorde a derecho, resolución que, como se anunció anteriormente, no puede ser otra que la estimatoria del motivo aducido por la parte recurrente y ello por cuanto que aun cuando ateniéndonos a la literalidad de lo consignado en el Plan, los terrenos en disputa, se reconocen como titularidad del municipio de Benahavís, una vez que en dicho instrumento urbanístico se acuerda la legalización de lo construido en él, es claro que no solo indirectamente se está resolviendo acerca de su titularidad, delimitando los linderos entre ambos municipios, sino que además se está proyectando el Plan a unos terrenos pertenecientes a otro municipio, conclusiones ambas que no pueden ser acogidas".

Esta sentencia trajo como consecuencia el archivo del procedimiento de alteración de límites municipales que la Administración autonómica había iniciado al detectarse la contradicción entre la linde propuesta por el planeamiento y la linde histórica certificada en los archivos del Instituto Cartográfico de Andalucía, prevalentes a estos efectos sobre



los datos gráficos catastrales que se indebidamente priorizaron en el trámite del PGOU de 1986. Este procedimiento de alteración de límites municipales fue definitivamente archivado por medio de orden de fecha 7 de septiembre de 2015, a la que precedió el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella en sesión extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2015, en el que a raíz de la anterior sentencia se ponía de manifiesto que el nuevo equipo de gobierno tenía como objetivo reconocer los límites oficiales fijados de forma definitiva el 14 de mayo de 1873, y que dichos límites iban a ser modificados en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente, reconociendo la demarcación territorial del municipio de Marbella, tal como consta en la documentación del Instituto Cartográfico de Andalucía.

La sentencia de esta Sala de fecha 12 de noviembre de 2018 (rec. 44/16) conoció del recurso frente a esta resolución administrativa de archivo del procedimiento de alteración de límites municipales de 7 de septiembre de 2015, y concluyó avalando la decisión de la Administración autonómica, pues se consideró injustificado modificar una linde histórica a impulso de la actividad de planeamiento de la Administración municipal, por el evidente riesgo que representaba de volatilidad e incerteza de los límites municipales el aceptar tal mutación vía actuación administrativa discrecional de planeamiento, asumiendo en definitiva la bondad del planteamiento expuesto en el Dictamen del Consejo Consultivo 478/2009, de 15 de julio, recabado por la entonces Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que apunta a la prevalencia de la demarcación oficial frente a la cartografía del planeamiento, exponiéndose que la subordinación del planeamiento general allindero oficial del término municipal no solamente viene impuesta por ser el municipio el sustrato físico sobre el que se ejercen las competencias municipales, más aún las urbanísticas, sino también por la dependencia o subordinación en la que, respecto a la ordenación del territorio, se encuentra la ordenación urbanística, por lo que concluía la referida sentencia de la Sala de 12 de noviembre de 2018 que "la finalidad de solventar las discrepancias existentes entre los límites de los términos municipales resultantes de la documentación oficial y del planeamiento no necesariamente debe obtenerse por la vía de adaptar la oficial al planeamiento, acomodando la delimitación oficial de los términos municipales a la realidad fáctica existente o resultante de la aprobación y ejecución del planeamiento, sino por la de modificar los instrumentos de planeamiento respectivos y adaptar sus determinaciones a los límites territoriales resultantes de la delimitación oficial, so pena de conseguir el efecto de una alteración de términos municipales por la vía de lo fáctico cuando de los diversos informes obrantes en el expediente y de las alegaciones mismas de las partes en sus escritos de demanda y de contestación respectivos resulta que ambos municipios habían venido aprobando y ejecutando indebidamente las actuaciones urbanísticas en la zona afectada desde, al menos, el año 1985, por más que la ejecución lo hubiera sido de forma pacífica."

Y en parecidos términos se pronuncian las Sentencias del mismo órgano de 9/2/2015 (recurso 676/2010) y 12/11/2018 (recurso 44/2016).

TERCERO.- Subsidiariamente a lo anterior se van a negar los hechos aducidos por Fuengirola sobre prestación de servicios a la zona debatida. No solo se trata de un dato irrelevante, como se ha razonado anteriormente, sino que además existen servicios que se prestan por Benalmádena y otros por los propietarios. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el acceso a este espacio se realiza desde Benalmádena, por lo que el nuevo deslinde daría lugar a un enclave solo accesible desde Benalmádena.

El concepto jurídico indeterminado que se contiene en el art. 93.3.c de la Ley 5/2010 no ha sido justificado por Fuengirola que, prácticamente, se limita a exponer hechos, pero sin explicitar que consecuencias tienen los mismos. Por ejemplo, afirma Fuengirola que



ese Ayuntamiento ha ordenado urbanísticamente ese espacio. Ya se ha explicado que ello per se no puede justificar una alteración del término, y ahora añadimos nosotros: ¿qué trascendencia adicional tiene ello?

Si se va a seguir aplicando por parte de Benalmádena la ordenación urbanística propuesta por Fuengirola (véase la contestación de la Junta de Andalucía de 13/7/2021) y no va a haber variación, por tanto, ¿qué incidencia van a tener los particulares?

Los argumentos expresados en la memoria aportada por el Ayuntamiento de Fuengirola son inasumibles, inaceptables y ni siquiera respetan o se ajustan a lo exigido por el art. 93.3 de la Ley 5/2010. A continuación se intentan analizar de forma pormenorizada los distintos alegatos del Ayuntamiento de Fuengirola.

Sobre la supuesta ordenación urbanística de ese espacio por parte de Fuengirola solo cabe remitirnos a lo ya dicho. Benalmádena se ha opuesto a tal ordenación y, en cualquier caso, la jurisprudencia no hace derivar de tal hecho la consecuencia de que haya de modificarse el término municipal.

Se afirma en la expresada memoria:

“5. CONCLUSIÓN

La segregación que se pretende es procedente, ya que no se trata de alterar la realidad actual del suelo, que desde siempre, ininterrumpidamente y sin contradicción material alguna, ha pertenecido a Fuengirola (en el sentido de ser gestionado y de ejercer la auctoritas sobre él). Por lo tanto, se trata exclusivamente de adecuar la realidad material a la legal. Es patente que no sólo la segregación y agregación a Fuengirola no modifica en nada el estado de cosas real, al contrario, sería precisamente la aplicación estricta de los límites territoriales decimonónicos el hecho ex-novo que supondría el cambio de status sobrevenido para los habitantes de la zona, que se asentaron en sus viviendas bajo un régimen que les era conocido previamente (tributario, administrativo, etc...) y que indudablemente, como quienes les antecedieron, tuvieron en cuenta y bajo el que residen pacíficamente, y que por mor de una formalidad legal, nunca materializada, ven alterado su estado de cosas.

En resumen, si cuando se pretende la alteración de las delimitaciones de los municipios para modificar su realidad, debe ser el análisis riguroso y el criterio restrictivo, porque se están alterando las circunstancias materiales, precisamente en este caso sucede a la inversa, lo que la presente segregación de Benalmádena y agregación a Fuengirola pretende es justo lo contrario, que no se altere la realidad y permanezca exacta y escrupulosamente como está, como viene estando y como siempre ha estado. No es sólo que la práctica y la teoría de la demarcación coincidan, es incluso un derecho de quienes se verían afectados y alterados sus derechos y obligaciones sin una causa justa, real y material que les deba hacer estar y pasar por ello. Por ello, ante la inexistencia de alteración en el municipio del que se segrega, que en nada ve modificada su situación real, y -de la misma forma- dado que la alteración no produce ninguna consecuencia en el municipio al que se agrega, entendemos que procede acceder a la alteración territorial que se solicita.”

Con todos los respetos, resulta inconcebible que se utilice semejante argumentación. Dejando a un lado la falta de realidad de los hechos que se alegan (consentimiento por parte de Benalmádena, colindancia con zonas urbanas de Fuengirola, etc.) la “pseudo prescripción adquisitiva” que parece subyacer en tal fundamento vulnera la más elemental acepción de la Justicia. En esencia viene a decir Fuengirola que como han



estado “ocupando” o ejerciendo potestades en un determinado espacio, el mismo le pertenece, con independencia del deslinde oficial. Vamos a dar por sentado, en aplicación del principio de buena fe, que esa ocupación ha sido llevada a cabo de forma inconsciente. Si se hubiera tratado de una ocupación deliberada la cuestión podría alcanzar connotaciones de más gravedad. Pues bien, lo normal y correcto es, en cualquier ámbito, que si de forma equivocada se ha venido ocupando un determinado espacio, pensando que le pertenecía, y luego se comprueba que existe un error, se proceda a dejar libre y expedito tal espacio. Por ello no se acierta a comprender por qué Fuengirola pretende apropiarse de una superficie cuya pertenencia a Benalmádena es indiscutible. De una situación irregular (ocupación de lo que no le corresponde, de buena o mala fe) no puede derivarse derecho alguno en orden a la adquisición de dicho espacio. Esa supuesta ocupación consentida no sirve de título para el cambio de lindes.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Fuengirola no acredita ninguno de los motivos establecidos por el art. 93.3.c de la Ley 5/2010. Se afirma en la memoria:

“Mediante la documentación adjunta se justifican las circunstancias indicadas, es decir, la continua jurisdicción de Fuengirola sobre el territorio afectado. Además, de la documentación gráfica se acredita que con la alteración no se crea una zona aislada, ya que existe consolidación urbana de la zona con el resto del municipio de Fuengirola.”

La supuesta continua jurisdicción de Fuengirola sobre el territorio afectado no es una circunstancia, sino un hecho del que podrían derivarse circunstancias, pero ninguna circunstancia se alega por Fuengirola que pueda tener encaje en dicho precepto. Como consecuencia del replanteo acordado por Orden de la Consejería de 15 de octubre de 2020 se han producido o se van a producir variaciones en Catastro, Censos, Registro de la Propiedad, etc. Pero se trata de consecuencias normales, derivadas de la necesidad de corregir una situación anómala e incorrecta. Lo que no puede pretenderse, si se quiere actuar con un mínimo de seriedad y honestidad, es perpetuar una situación anómala acudiendo al artificio de alterar artificialmente las lindes.

Es decir, el hecho de que, por ejemplo, una serie de vecinos (en escasísimo número, por cierto) pasen de estar empadronados en Fuengirola a estarlo en Benalmádena es una consecuencia derivada del replanteo, pero no una circunstancia demográfica que justifique la alteración de lindes. Y ello sin necesidad de analizar que tal variación no supone perjuicio alguno para esos vecinos, pues no se tiene derecho subjetivo a elegir la vecindad, ya que esta condición está vinculada al municipio de residencia. Además, se arroga indebidamente el Ayuntamiento de Fuengirola la facultad de decisión de esos vecinos sobre su empadronamiento en Benalmádena. Téngase en cuenta que los residentes de este espacio ya se encuentran empadronados en Benalmádena

QUINTO.- Mención especial merecen las causas económicas que se alegan por Fuengirola en justificación de la alteración del deslinde. En el informe económico que aporta Fuengirola se afirma (el subrayado es nuestro):

“Por consiguiente, respecto de la posibilidad y conveniencia, en el aspecto económico de la modificación que se pretende, de una parte, es clara la viabilidad económica de los municipios de Fuengirola y Benalmádena, tal y como resultarían de la modificación propuesta de los términos municipales, ya que la modificación es puramente formal en cuanto que la realidad jurídica y fáctica de ambos municipio no se verá alterada, pues tal y como la propuesta lo deja establecido es como en la actualidad y desde hace mucho tiempo viene siendo aceptado por ambos municipios, **que nada ganan ni pierden**”



respecto de lo que ya vienen administrando. Por ello, al no modificarse de hecho ni la capacidad fiscal de la población ni la riqueza imponible del nuevo territorio en relación con los gastos derivados de la prestación de los servicios que como mínimo tienen que atender, **en nada afecta el expediente de alteración a las economías municipales afectadas respecto de la situación que ya tengan.**

.....
Tampoco, y siempre por el mismo motivo, existe justificación para plantear ninguna compensación territorial o económica del Municipio originante de la alteración (Fuengirola) al que sufra la segregación (Benalmádena), pues, como se ha explicado, **la situación actual desde hace mucho tiempo es la misma que la resultante de la alteración**, pues -insistimos- ésta es puramente formal.

El silogismo que emplea Fuengirola resulta sorprendente: como la alteración de las lindes parece responder a una supuesta realidad fáctica, ningún perjuicio se va a causar a Benalmádena, pues nunca ha dispuesto de esos terrenos. Es como si a un particular que se hubiera visto privado indebidamente de la posesión de un terreno por parte de un vecino se le pretendiera privar de la propiedad y se le dijera que ello no le afecta. Volvemos a repetir argumentos anteriores: una incorrecta apreciación o proyección de las lindes sobre el terreno físico, no puede implicar perjuicio alguno para quien ha sufrido y padecido. Más bien al contrario, Benalmádena deberá ser resarcida de los perjuicios económicos sufridos por la indebida ocupación que Fuengirola ha podido hacer de parte de su término municipal.

SEXTO.- Al caso resultan de aplicación los fundamentos del Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 202/2010 de 14 de abril de 2010, emitido con ocasión del proyecto de Orden por la que se deniega la realización de nuevo deslinde entre los términos municipales de Chipiona y Rota, ambos en la Provincia de Cádiz, en el Área denominada La Ballena, argumentos que se dan por reproducidos. Igualmente se invocan los argumentos de la Orden de la Consejería de Gobernación de 9/7/2010 (BOJA del 23/7/2010), que señala:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto 185/2005, de 30 de agosto, los límites establecidos son inamovibles, de forma que cuando los Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites existentes en la actualidad, o que se fijen en el futuro, cualquiera que sea la fecha de las actas en que hubieran quedado establecidos, no procederá nueva fijación, salvo casos excepcionales, en que documentalmente se justifiquen de forma fehaciente errores materiales o vicios del procedimiento de delimitación. También procederá un nuevo deslinde comprobatorio cuando algún Ayuntamiento cuestione la corrección del deslinde por existencia de duda razonable sobre el trazado de la línea límite o el lugar de los hitos o mojones, debido a la pérdida de éstos o a la desaparición o alteración de elementos permanentes o accidentes geográficos que se hubiesen usado para la descripción de dicha línea.

Por todo lo expuesto, procede que por el Pleno (requiriéndose a tal efecto mayoría absoluta) se acuerde:

1.- Mostrar la disconformidad del Ayuntamiento de Benalmádena con la alteración de su término municipal planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, alteración que se tramita en el expediente 1/2021 /AMU-JARH de la Dirección General de Administración Local, por, entre otros, los motivos expuestos y por considerar que no concurren motivos de ningún tipo para dicha alteración que supondría otorgar carta de naturaleza y legitimar la indebida ocupación que por vía de hecho pudo producirse en el pasado.



2.- Trasladar el expediente a los servicios económicos del Ayuntamiento para que se analice la viabilidad de exigir la compensación económica que pudiera corresponder por la indebida ocupación del término municipal por parte de Fuengirola.

3.- Dar traslado del acuerdo plenario que se adopte junto con la siguiente documentación:

- Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de Málaga) dictada en los autos 661/11.
- Informe de la Unidad Jurídico Administrativa de Urbanismo de 21/12/2020.
- Informe de la Junta de Andalucía de 13 de julio de 2021.
- Informe de Emabesa sobre suministro domiciliario de agua potable.
- Informe del Arquitecto municipal (de 11/02/2022).
- Copia de la Orden de la Consejería de Turismo de 15/10/2020."

Informe del Negociado de Padrón de fecha 08/02/2022

"Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente **INFORME**:

En el BOJA de fecha 27 de octubre de 2020 se publicó la Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola.

Desde este Ayuntamiento, con fecha 19 de abril de 2021, se comunicó al INE la modificación de la citada línea, a los efectos de iniciar los trámites reglamentarios para regularizar la situación de la población afectada en materia de Padrón de Habitantes y Censo Electoral.

Siguiendo las instrucciones del INE, se procedió a incorporar en el Padrón de Habitantes de nuestro Ayuntamiento a los vecinos afectados, y remitir la información al INE en los ficheros de variación mensual de los meses de mayo y julio de 2021."

Informe del Negociado de Catastro de fecha 07/02/2022

Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente **INFORME**:

ANTECEDENTES

- Con fecha 02/03/2021, la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga emitió Acuerdo de Alteración de la descripción catastral, de los inmuebles indicados en el anexo, como consecuencia de la tramitación del procedimiento de comunicación de deslinde con número de expediente 00885323.29/20. Se aporta copia de unos de los acuerdos.
- Con fecha 12/05/2021, la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga remitió fichero de intercambio DOC donde comunicaba las alteraciones catastrales efectuadas en el mes de marzo de 2021 y que tenían efectos retroactivos.

INFORME

- En el acuerdo de alteración catastral de fecha 02/03/2021 se indica lo siguiente:
- "Se incoa el expediente para proceder al deslinde de los municipios de Benalmádena y Fuengirola, conforme al replante publicado en el BOJA de 27 de octubre de 2020 y recogido en la Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se establece, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola. Dichas alteraciones tendrán efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 16 de octubre de 2020."



- En el fichero DOC del mes de marzo venían incluidos los bienes inmuebles del anexo al tener consecuencias tributarias para el año 2021. Se emitieron liquidaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para el año 2021.

CONCLUSIÓN-RESUMEN

Los inmuebles incluidos en el anexo forman parte del padrón de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Benalmádena desde el año 2021.

ANEXO. Relación de Inmuebles afectados:

Ref. Catastral	Clase	Dirección Tributaria	Resto
29025A00509005000 0QR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 0	
7199601UF5479N000 0HR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 6-C	BA-6C
7199602UF5479N000 0WR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 6-B	BA-6B
7199603UF5479N000 0AR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 6-A	BA-6A
7199604UF5479N000 0BR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 18-Q	U-18A
7199606UF5479N000 0GR	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 18-Z	U-18B
7201801UF5570S000 0YW	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 1-B	BA-1
7301801UF5570S000 1XE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 3 Esc: 1 Pl: 00 Pt: 01	
7301802UF5570S000 1IE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 1	
7301803UF5570S000 1JE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 5	ALISO 3
7301804UF5570S000 1EE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 7	ALISO 4
7301805UF5570S000 1SE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 1	
7301806UF5570S000 1ZE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 3	ALISO 7
7301807UF5570S000 1UE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 5	FRESNO 8
7301901UF5570S000 1EE	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 2 Esc: 1 Pl: 00 Pt: A	ALMENDRO
7301901UF5570S000 2RR	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 4 Esc: 1 Pl: 00 Pt: B	ALMENDRO
7301901UF5570S000 3TT	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 6 Esc: 1 Pl: 00 Pt: C	ALMENDRO
7301901UF5570S000 4YY	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 8 Esc: 1 Pl: 00 Pt: D	ALMENDRO



7301901UF5570S000 5UU	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 10 Esc: 1 Pl: 00 Pt: E	ALMENDRO
7301901UF5570S000 6II	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 12 Esc: 1 Pl: 00 Pt: F	ALMENDRO
7301901UF5570S000 7OO	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 14 Esc: 1 Pl: 00 Pt: G	ALMENDRO
7301901UF5570S000 8PP	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 16 Esc: 1 Pl: 00 Pt: H	ALMENDRO
7301901UF5570S000 9AA	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 18 Esc: 1 Pl: 00 Pt: I	ALMENDRO
7301901UF5570S001 0OO	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 20 Esc: 1 Pl: 00 Pt: J	ALMENDRO
7301901UF5570S001 1PP	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 22 Esc: 1 Pl: 00 Pt: K	ALMENDRO
7301901UF5570S001 2AA	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 20 Esc: 2 Pl: 00 Pt: A	ALMENDRO
7301901UF5570S001 3SS	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 18 Esc: 2 Pl: 00 Pt: B	ALMENDRO
7301901UF5570S001 4DD	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 16 Esc: 2 Pl: 00 Pt: C	ALMENDRO
7301901UF5570S001 5FF	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 14 Esc: 2 Pl: 00 Pt: D	ALMENDRO
7301901UF5570S001 6GG	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 12 Esc: 2 Pl: 00 Pt: E	ALMENDRO
7301901UF5570S001 7HH	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 10 Esc: 2 Pl: 00 Pt: F	ALMENDRO
7301901UF5570S001 8JJ	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 8 Esc: 2 Pl: 00 Pt: G	ALMENDRO
7301901UF5570S001 9KK	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 6 Esc: 2 Pl: 00 Pt: H	ALMENDRO
7301901UF5570S002 0HH	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 4 Esc: 2 Pl: 00 Pt: I	ALMENDRO
7301901UF5570S002 1JJ	Urbana	CL. ALAMO (HIGUERON), 2 Esc: 2 Pl: 00 Pt: J	ALMENDRO
7301902UF5570S000 1SE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 2	
7301903UF5570S000 1ZE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 4	ALISO 17
7301904UF5570S000 1UE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 6	ALISO 16
7301905UF5570S000 1HE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 8	
7301906UF5570S000 1WE	Urbana	CL. ALISO (HIGUERON), 10	ALISO 14



7301907UF5570S000 1AE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 2	FRESNO 13
7301908UF5570S000 1BE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 4	FRESNO 12
7301909UF5570S000 1YE	Urban a	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 6	FRESNO 11
7301910UF5570S000 1AE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 8	FRESNO 10
7301911UF5570S000 1BE	Urbana	CL. FRESNO DEL HIGUERON, 10	FRESNO
7399202UF5479N000 1JT	Urbana	CL. FICUS DEL HIGUERON, 1	PARCELA U2-1
7399203UF5479N000 1ET	Urbana	CL. FICUS DEL HIGUERON, 2	PARCELA U2-2
7399204UF5479N000 1ST	Urbana	CL. ENCINA DEL HIGUERON, 5	FICUS U-3
7399205UF5479N000 1ZT	Urbana	CL. ENCINA DEL HIGUERON, 7	PARCELA U2-4
7403801UF5570S000 0MW	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 0	
7403802UF5570S000 0OW	Rústica	ZN. HIGUERON EL, 0	

Por el Secretario de la Comisión y el Arquitecto Municipal, se ofrecen diversas explicaciones sobre el asunto. El Arquitecto municipal explica con medios audiovisuales la alteración de las lindes que pretende el Ayuntamiento de Fuengirola.

Sometido el asunto a votación se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta el siguiente dictamen:

PRIMERO.- Mostrar la disconformidad del Ayuntamiento de Benalmádena con la alteración de su término municipal planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, alteración que se tramita en el expediente 1/2021 /AMU-JARH de la Dirección General de Administración Local, por, entre otros, los motivos expuestos y por considerar que no concurren motivos de ningún tipo para dicha alteración que supondría otorgar carta de naturaleza y legitimar la indebida ocupación que por vía de hecho pudo producirse en el pasado.

SEGUNDO.- Trasladar el expediente a los servicios económicos del Ayuntamiento para que se analice la viabilidad de exigir la compensación económica que pudiera corresponder por la indebida ocupación del término municipal por parte de Fuengirola.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo plenario que se adopte junto con la siguiente documentación:

- Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de Málaga) dictada en los autos 661/11.
- Informe de la Unidad Jurídico Administrativa de Urbanismo de 21/12/2020.
- Informe de la Junta de Andalucía de 13 de julio de 2021.
- Informe de Emabesa sobre suministro domiciliario de agua potable.



- Informe del Arquitecto municipal (de 11/02/2022).
- Copia de la Orden de la Consejería de Turismo de 15/10/2020."

El Pleno por unanimidad de los 24 miembros presentes (11, 2, 6, 3 y 2, de los Grupos PSOE-A, IU Andalucía, Partido Popular, Ciudadanos y VOX), de los 25 que de derecho lo integran, aprueba el dictamen de la Comisión transcrita y, en consecuencia,

PRIMERO.- Mostrar la disconformidad del Ayuntamiento de Benalmádena con la alteración de su término municipal planteada por el Ayuntamiento de Fuengirola, alteración que se tramita en el expediente 1/2021 /AMU-JARH de la Dirección General de Administración Local, por, entre otros, los motivos expuestos y por considerar que no concurren motivos de ningún tipo para dicha alteración que supondría otorgar carta de naturaleza y legitimar la indebida ocupación que por vía de hecho pudo producirse en el pasado.

SEGUNDO.- Trasladar el expediente a los servicios económicos del Ayuntamiento para que se analice la viabilidad de exigir la compensación económica que pudiera corresponder por la indebida ocupación del término municipal por parte de Fuengirola.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo plenario que se adopte junto con la siguiente documentación:

- Sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de Málaga) dictada en los autos 661/11.
- Informe de la Unidad Jurídico Administrativa de Urbanismo de 21/12/2020.
- Informe de la Junta de Andalucía de 13 de julio de 2021.
- Informe de Emabesa sobre suministro domiciliario de agua potable.
- Informe del Arquitecto municipal (de 11/02/2022).
- Copia de la Orden de la Consejería de Turismo de 15/10/2020.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, correspondiendo el presente certificado al Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 24 de febrero de 2022, sobre "7º.- Contestación del escrito de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Expediente de alteración de la línea divisoria que delimita los términos municipales de Benalmádena y Fuengirola. (Expte. 2020/0036929F)", salvedad y a reservas de los términos que resulten del acta correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.



Ayuntamiento de Benalmádena
Secretaría General

